

LOS DEBERES DE LA CULTURA

Elena Angulo Aramburu

Las tres décadas de gestión democrática en España han supuesto un desarrollo importante del mundo cultural. Desde las iniciales actividades de los ayuntamientos democráticos, los primeros en practicar una gestión cultural con escasas referencias históricas, pasando por la creación de un Ministerio de Cultura que comienza a ordenar las instituciones y a legislar sobre las competencias de las distintas administraciones, hasta la actual situación en la que se realizan acciones culturales no solo por las administraciones, sino por las universidades, canales televisivos y multitud de instancias y asociaciones privadas, se ha producido un enorme cambio cualitativo en la gestión cultural.

En estos años se han desarrollado políticas culturales de todo tipo. Desde la gestión apresurada de actividades reclamadas por colectivos como necesarias o prioritarias, pasando por copias de modelos foráneos, hasta creaciones autónomas fruto de la experiencia y conocimiento de gestores adelantados a su medio y autoformados con lecturas y prácticas reflexivas.

En todo este tiempo se ha ido respondiendo por un lado a las "demandas" de los ciudadanos, con los instrumentos de gestión al uso, siguiendo instrucciones políticas, y produciendo infraestructuras y programas que dado el prestigio de la "cultura" entre los ciudadanos se realizan a cualquier coste económico y humano.

Los gestores han ido formándose a través

de la experiencia y la reflexión individual y colectiva, pero los fallos del modelo en sus aspectos democráticos, son aceptados como un defecto difícilmente subsanable. Nuestro deber es enfrentarnos a los nuevos desafíos reconociéndolos y dándoles solución.

Nuestro país está lleno de infraestructuras culturales que han posibilitado a conocidos arquitectos desarrollar ideas, en algunos casos nada funcionales y en muchos, muy costosas, sin haber programado antes ni la función de dichas infraestructuras, ni las posibilidades de su mantenimiento, ni el conocimiento sobre el posible público.

Andalucía ha sido ajena, en general, a esta epidemia, y sin embargo han fallado y siguen fallando algunos aspectos importantes para crear infraestructuras útiles y adaptadas a las necesidades reales de la población.

Generalmente el municipio de turno quiere hacerse con el protagonismo absoluto de cualquier proyecto de edificación para rentabilizarlo políticamente, olvidando que quizás no llegue a inaugurarlo, y además, que, el fin del edificio es ser asumido por los ciudadanos como algo propio.

Se proyectan edificios de gran formato, cuya construcción se eterniza por carecer del presupuesto necesario. Los responsables tratan de esconder la situación, para no alertar a la oposición sobre la realidad y soslayar la crítica. Esta situación no se

plantearía de haber existido negociación, claridad y comunicación desde el inicio de la propuesta.

Antes de empezar un edificio debería de hacerse un estudio, compartido por las instituciones, sobre la población a la que se va a servir, las infraestructuras ya existentes en la comarca y la provincia, la formación de los agentes locales, la interacción de los colectivos existentes... Se trata sencillamente de planificar, todas las instituciones implicadas conjuntamente, sin dejarse llevar por presiones interesadas en las que prevalezcan los intereses de notoriedad o rentabilidad política.

Sobre la situación formativa de los agentes culturales, conocemos tal variedad de situaciones, como que en muchos casos los propios concejales han tenido que hacer la función de técnicos en ciertos municipios.

No debería proyectarse ninguna construcción sin tener previsto su uso estable y para ello contar con técnicos preparados para su mejor utilización y conservación. Ya existen programas presenciales y a distancia para procurar esa formación; y además dicha formación, debe llevarse a cabo paralelamente a la construcción del edificio, para que la última instalación de los equipamientos se haga con la colaboración de los técnicos. Así se podrá resistir el peligro de comprar últimas tecnologías, a veces inútiles. Para ello es imprescindible que los ayuntamientos contraten a los técnicos con suficiente tiempo antes de la inauguración. De esta forma desde la inauguración las infraestructuras se utilizarán convenientemente.

En cuanto al público, aunque muy variado según la edad y la educación que haya recibido, tiene algo en común que es la falta de tradición continuada de generaciones en el disfrute del mundo de las artes por un lado, y por otro, la actual adicción a la televisión y a los modelos de gustos propiciados mayoritariamente en su programación. La creación y formación de públicos es una tarea de las administraciones, que no deberían dejarse llevar absolutamente por las apetencias populistas y rentables a corto plazo predominantes en nuestra sociedad.

Sobre la elección de los programas, en el supuesto de que los programadores sean personas formadas y con criterios de rentabilidad cultural y no sólo política, éstos se suelen encontrar con varios dilemas:

1º El desconocimiento por parte de los responsables de la cultura de cuáles son las corrientes artísticas actuales y de cómo se conforma el gusto del público que debe estar basado en un equilibrio entre tradición de calidad y riesgo contemporáneo.

2º Las apetencias localistas y folklóricas de la demanda local que, con toques "chauvinistas" plantean una lucha contra proyectos universales y profundos que necesitan de espectadores activos.

3º La tendencia de las administraciones a continuar utilizando la gratuidad como elemento consustancial a lo cultural, cuando después de tres decenios de democracia y desarrollo económico, habría que discernir entre igualdad de oportunidades de acceso a la cultura y gratuidad de la acción cultural.

Un caso bastante repetido es el de instituciones que contratan a alguna "figura" a cualquier precio, en lugares donde no existe tan siquiera una programación continua.

La respuesta a estas situaciones deberá hacerse a través del conocimiento de las necesidades y demandas ciudadanas y con criterios claros que defiendan la programación huyendo tanto del populismo como del snobismo.

Por último, está el tema de los recursos. No me refiero a los humanos, imprescindibles en la acción cultural, sino a los económicos. Hay que ajustarse a los presupuestos. Nos encontramos con que no siempre los deseos de los políticos, se corresponden con los recursos necesarios; además en muchas ocasiones se encuentran con presiones que les llevan a hacer promesas difícilmente realizables, lo que produce un desfase entre presupuesto y realidad.

A esto hay que añadir la dificultad de gestión que se suele ejecutar con instrumentos inadecuados, lo que dificulta aún más el llevar a buen puerto una programación con garantías. Las deudas a artistas y proveedores son moneda corriente en nues-

tos pagos. El malestar y la falta de seriedad que esto provoca en el mundo cultural, legitiman la desgana para emprender acciones interesantes y arriesgadas.

Es necesario tener claridad y valentía para negar la satisfacción de determinadas demandas, pero debemos de ir acostumbrándonos a hacer partícipes a los ciudadanos tanto de nuestra capacidad gestora como de la imposibilidad de satisfacción completa de sus deseos.

Son necesarios gestores que utilicen ajustadamente los recursos obtenidos por los impuestos de todos y que demuestren sus capacidades en la captación de recursos ajenos, llevando a cabo su tarea con una transparente ética profesional.

Lo expuesto anteriormente es posible realizarlo. De hecho ya hay personas e instituciones luchando por una gestión cultural democrática y eficaz. Existen ya instrumentos de gestión y de formación que nos ayudan a ampliar el círculo de los que quieren hacer sus deberes en el mundo de la cultura.

Elena Angulo Aramburu

*Directora del MBA en Empresas e Instituciones culturales
Universidad de Salamanca-Santillana Formación*